



O F I C I O

S/REF: 001-000548

N/REF: JISE/Portal Transparencia

FECHA: 13-1-2015

ASUNTO: Solicitud Criterio Técnico ITSS

DESTINATARIO: [REDACTED]

PRIMERO.- Con fecha 16 de diciembre de 2014 tuvo entrada en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 001-000548.

El contenido de la solicitud es el siguiente:

*“...De conformidad con el artículo 7 a) de la Ley 19/2013.... Solicito el texto del Criterio Técnico número 92/2012, de 28 de noviembre, sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.”*

El fundamento de dicha solicitud tiene su origen en el artículo 7 a) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, titulado “información de relevancia jurídica” que debe ser objeto de publicidad activa, señalando la letra a) de dicho artículo que las Administraciones Públicas publicarán “las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos”.

**Debe tenerse en cuenta en primer lugar que el criterio sobre el que se solicita información responde a la categoría de “criterio operativo” y no de “criterio técnico”.**

En el caso de los criterios técnicos, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, expone su parecer o fija determinados criterios en relación con la interpretación de la normativa de orden social en el marco de la actuación inspectora, **lo que ha motivado la publicación de dichos criterios de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre.**

A diferencia de los anteriores criterios técnicos, los criterios operativos articulan los mecanismos de actuación y de organización interna de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como ocurre en el caso del criterio operativo 92/2012, circunscribiéndose el mismo a la actuación inspectora en los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada, con vistas a lograr una actuación inspectora uniforme y coherente en todo el territorio nacional, sin que dicho criterio suponga interpretación alguna de la normativa reguladora de dicho procedimiento ni tenga efectos jurídicos.



Ni siquiera el criterio operativo sobre el que se solicita información puede entenderse incluido el artículo 6 de dicha Ley 19/2013 de 9 de diciembre, pues dicho criterio no proporciona información sobre las funciones que desarrollan los funcionarios, ni sobre la normativa de aplicación o su estructura organizativa, ni regula cuestiones relativas a planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución (cuestiones que son objeto de publicaciones tales como la memoria anual de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, etc.).

La solicitud fundamenta su petición vía artículo 7 a) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, dedicada a la publicidad activa, cuestión sobre la que ya se ha pronunciado esta Dirección General con anterioridad.

No obstante, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de la Ley 19/2013, reguladora del ejercicio del derecho de acceso a dicha información al dictar la siguiente resolución.

SEGUNDO.- La letra g) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las funciones de inspección, vigilancia y control.

Además, el apartado 2 del artículo 14 dispone que la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

TERCERO.- Una vez analizada la solicitud esta Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera que la divulgación de la información a la que se pretende acceder supondría un perjuicio para las materias expuestas en el expositivo precedente, por los siguientes motivos:

El fundamento del criterio operativo sobre el que solicita información tiene como objetivo fijar los modos de actuar de los inspectores de trabajo y seguridad social en procedimientos de despidos colectivo y suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada, estableciendo pautas de actuación de los inspectores de trabajo y seguridad social durante el desarrollo de los períodos de consultas de los procedimientos y con ocasión de los informes a emitir por los inspectores de trabajo y seguridad social.

El contenido de dicho criterio operativo incluye, entre otros supuestos, la documentación que debe ser objeto de examen en determinados supuestos para comprobación de lo manifestado por la empresa a la Autoridad Laboral, comunicaciones que pueden dirigir a dicha Autoridad con motivo de algunas incidencias que puedan tener lugar con ocasión del desarrollo del procedimiento, controles de calidad por parte de órganos directivos, recomendaciones realizadas a los funcionarios de la Inspección durante el desarrollo de la función indagatoria, etc.

Por lo anterior, **la entrega de dicha información puede suponer un perjuicio para las labores de investigación, control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en dichos supuestos**, por lo que prevalece la existencia de un interés superior en proteger la labor





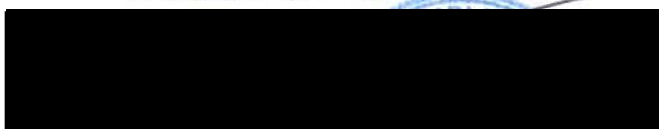
indagatoria y de control por parte de la Inspección de Trabajo y Social sobre el interés privado del sujeto solicitante basado en el derecho a obtener información, teniendo en cuenta además que dicho criterio, dada su naturaleza, como ya hemos hecho referencia al hacer la distinción entre criterios técnicos y operativos al hablar de la publicidad activa, en ningún caso produce efectos jurídicos en la esfera de dicho sujeto privado.

CUARTO.- En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14.1. g) y 4.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se deniega el acceso a la información pública cuya solicitud tuvo entrada en esta Dirección General con fecha 16 de diciembre de 2014 y que quedó registrada con el número 001-000548.

QUINTO.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, 13 de enero de 2015

EL DIRECTOR GENERAL



José Ignacio Sacristán Enciso

